

Iberoamérica y la urgencia de las políticas públicas

RICARDO LAGOS *

E

ste nuevo año encuentra a la Comunidad Iberoamericana con la mirada puesta en el futuro, definiendo su presencia y aporte en el escenario internacional del siglo XXI. Somos algo distinto, tenemos mucha historia en común, venimos de determinadas raíces desde las cuales emergen palabras, derechos, artes, convivencias, modos de ser.

Todo eso es importante en esta hora de relanzamiento, de ampliación de la plataforma política y conceptual, de puesta al día en los fundamentos desde los cuales el mundo iberoamericano puede actuar frente a los procesos globales. Es el momento de pensar en cómo impulsamos “nuestras políticas públicas”, con una visión democrática y un sentido político derivado de nuestras convicciones comunes. Al mismo tiempo, cómo vamos adelante con seriedad, con realismo, con avances sin retorno.

La democracia es un ejercicio de opciones, donde lo importante es hacer visible a los ciudadanos lo que se busca como proyecto país y las políticas en las cuales se pondrán las prioridades. Hacer visibles los ritmos del avance y los objetivos esenciales de esa política. Si las prioridades están en mejorar la salud, en dar calidad a la educación, en terminar con la extrema pobreza, el desafío es lograr que los ciudadanos entiendan por qué la fuerza está colocada allí y cuáles son los resultados que se buscan. Es allí donde el Estado —en concreto nuestros estados iberoamericanos— necesita ciertos remezones de modernidad y puesta al día ante las tareas pendientes.

Las políticas públicas requieren espacios de imaginación y diseño, recursos humanos capaces y flexibles, mecanismos institucionales eficientes y abiertos, información pronta y orientadora. Y todo eso demanda, por cierto, una democracia sólida dispuesta a asumirse como un proceso en desarrollo permanente, para aprender de su propio andar.

* Ex Presidente de Chile

Las preguntas ineludibles. Por eso, también aquí es pertinente decir que al inicio del siglo XXI hay cuatro preguntas que nos desafían y reclaman nuestra atención:

Uno. ¿Cómo hacer para que la democracia no sea sólo una práctica de participación en elecciones, sino además un sistema donde el ciudadano sienta que siempre puede ser escuchado?

Dos. ¿Cómo articulamos crecimiento económico con políticas efectivas de mayor cohesión social, de manera que nadie se sienta excluido de la sociedad?

Tres. ¿Cómo incorporamos las dimensiones de la mayor diversidad cultural, que en cada una de nuestras sociedades existen, a un patrón común de prácticas democráticas, a partir de esa diversidad?

Cuatro. ¿Cómo articulamos el impacto de la globalización creciente, con la identidad de cada una de las comunidades locales?

Responder a estas preguntas ha sido tal vez la constante de estos años en Chile. Y hoy, cuando muchos nos preguntan qué han hecho y cómo lo han hecho, la respuesta termina por ser una síntesis de acción simultánea desde tres vertientes: una ampliación creciente de la democracia trabajando por la profundización de las libertades, un crecimiento económico permanente y abierto al mundo, y un compromiso profundo por lograr un avance persistente en los ámbitos de la justicia social.

Los chilenos ya sabemos a dónde nos condujo el escenario de las realidades contemporáneas. Debemos competir incesantemente y para hacerlo con éxito requerimos un país más justo, más cohesionado, donde todos se beneficien de los frutos del crecimiento.

Estamos convencidos de que la legitimidad y credibilidad de la democracia no está dada sólo porque funcionen instituciones, porque hagamos elecciones, sino también por cómo es nuestra economía y si ésta es capaz de dar oportunidades y espacios que permitan generar más riqueza.

En ese sentido, hay un debate entre los que creen que basta el solo crecimiento de la economía, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros no hemos practicado ese camino. Hemos dicho que tiene que haber crecimiento con equidad. Crecer sin distribuir mejor, o distribuir sin crecer, conduce fatalmente a crisis sociales y políticas y, en último término, a la pérdida de libertad.

Y en ese camino es necesario superar el falso dilema entre el ámbito público y el ámbito privado. La ejecución puede estar en manos de uno u otro, a partir de una política pública definida desde las instancias donde los ciudadanos han colocado su voluntad de acción.

¿Es posible pensar en un cierto paradigma donde los iberoamericanos trabajemos con este marco de grandes consensos?

La respuesta está en darnos cuenta de que en el mundo de la globalización las dimensiones regionales estarán determinadas por quienes manejen la agenda. Y en este caso existe la oportunidad de actuar juntos porque frente a problemas similares tenemos las afinidades de la gran identidad compartida. Hay un diálogo distinto entre latinoamericanos y españoles y portugueses porque tenemos raíces comunes.

Desde esa base podemos trabajar para avanzar entre nosotros una práctica de políticas públicas. Una suerte de testimonio en la globalidad donde lo que somos y hagamos sea un aporte en la mesa hemisférica, en el caso de los latinoamericanos, y un identidad especial en la mesa europea, en el caso de España y Portugal.

La vocación multilateral histórica. Uno podría decir que una cierta presencia pendular ha marcado el devenir histórico a un lado y otro del Atlántico ibérico, cuando se trata de construir mundos más justos, más libres, más compartidos.

América Latina fue un actor comprometido en la construcción del mundo multilateral emergente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. De los cincuenta países que en 1945 concurrieron a dar forma a la Carta de San Francisco, veintiuno eran latinoamericanos. ¿A qué apostaron ellos? A definir un orden multilateral donde los derechos humanos, la autonomía política, el crecimiento económico, la paz y el desarrollo social caminaran a la par. Buena parte de la agenda está pendiente, pero nadie discute que esa es la tendencia por donde debe ir el mundo. Y es un dato importante a tener en cuenta cuando queremos configurar una agenda iberoamericana propia.

España y Portugal pudieron sumarse a las Naciones Unidas en diciembre de 1955, pero sólo dos décadas más tarde lograron comenzar su camino hacia una democracia auténtica. Pero a esas alturas el panorama de América Latina se veía mayoritariamente marcado por gobiernos dictatoriales y faltas de libertades.

Fue sólo con los noventa —Quinto Centenario y caída del Muro de Berlín de por medio— que la marcha democrática comenzó a ir a un mismo paso. Y se empezó a hablar de Comunidad Iberoamericana, aunque más en tono de conmemoración que de proyecto político. España y Portugal eran ahora parte de la Unión Europea.

Por el continente latinoamericano avanzaban las banderas del llamado Consenso de Washington. Todos los países latinoamericanos asumieron las metas esenciales de aquella propuesta: mercados abiertos, privatizaciones, presupuestos equilibrados, control de la macroeconomía y otras. Ahora, ya caminando por el siglo XXI, está claro que a las doctrinas del Consenso de Washington había que agregar la heterodoxia de las políticas públicas, para

combatir la pobreza, disminuir las desigualdades, discriminar a favor de los más rezagados y generar oportunidades para todos.

Así lo hemos hecho en Chile y quienes hablan de nuestro buen comportamiento frente a los dictámenes de aquel Consenso olvidan mencionar toda la inmensa agenda impulsada al margen de aquella propuesta. Una acción que nos ha llevado, por ejemplo, a disminuir la pobreza del 40% al 18% en un período de quince años. Otros países latinoamericanos van por caminos similares y es la suma de todas las experiencias la que nos ofrece una gran oportunidad en el diálogo iberoamericano.

La oportunidad de nuestra tarea. Es obvio que existen matices de diferencias importantes entre el debate europeo y el latinoamericano al hablar de bienes públicos y de políticas nacionales para ello.

En Europa se busca reformar el antiguo Estado benefactor, con el fin de mejorar la competitividad y permitir una mayor innovación tecnológica, sin sacrificar un conjunto de derechos ciudadanos al bienestar, sin afectar un verdadero “piso” social. En América Latina, en cambio, el debate se refiere a cómo alcanzar ese “piso”, cómo lograr mayores niveles de equidad y de bienestar a partir de las necesarias reformas económicas que, en su mayor parte, ya se han logrado.

Varios países latinoamericanos estamos haciendo esfuerzos para conciliar las necesidades de economías muy abiertas en un mundo globalizado con las necesidades igualmente urgentes de solidaridad en sus sociedades. La libertad económica y la equidad no representan conceptos contrapuestos o incompatibles. Se puede estar a favor de una economía de mercado, pero es algo muy distinto impulsar una sociedad de mercado.

Se deben buscar fórmulas que hagan posible mantener y desarrollar economías dinámicas en sociedades basadas en la solidaridad. No hay recetas mágicas para alcanzar este círculo virtuoso. Tampoco hay una ideología general que proporcione las respuestas. Más bien, ellas se deben buscar día a día en la práctica misma.

¿Podemos en la Comunidad Iberoamericana abrirnos a trabajar en esta tarea? ¿Podemos gestar un Centro o un programa destinado específicamente a la formación de los expertos y altos funcionarios capaces de conducir las políticas públicas con eficiencia y calidad? ¿Hay espacio entre nosotros para seguir el ejemplo de otras entidades de alto prestigio internacional que se han concentrado en la tarea de formar servidores públicos de alto nivel?

En el ámbito público la responsabilidad del Estado es insustituible, para poder jugar un rol orientador y ordenador. Sólo la presencia de lo público, la voluntad política expresada de los ciudadanos es lo que puede lograr que el crecimiento se acompañe con equidad. Y para ello necesitamos políticas sociales fuertes, claras, bien focalizadas.

En suma, parece que empieza a surgir un nuevo paradigma en América Latina, un paradigma que surge no de la teoría, sino que emerge de la realidad concreta, de lo que se ha venido realizando.

El gran desafío de nuestra región es cómo somos capaces de crear una red de protección social si queremos tener cohesión y ser competitivos en el mundo. No son competitivos los países marcados por conflictos derivados de las dificultades y tensiones sociales. Exactamente lo opuesto de lo que ocurre en Europa, si bien es cierto que allá, tal vez por tener una red social muy extensa, sienten que esa red a ratos les impide ser competitivos por los costos que ello implica.

La ecuación a diseñar reclama visiones políticas novedosas, acordes a las realidades de cada país, pero con un proyecto estratégico común. Esa es la perspectiva que Iberoamérica tiene al frente: hacer posible sociedades donde su eje central sea la cohesión social.